

## CUANDO SE CONSUME EL CUERPO DEL PUEBLO. LA INCERTIDUMBRE COMO POLÍTICA DE SUPERVIVENCIA EN VENEZUELA

POR

PAULA VÁSQUEZ LEZAMA  
*CNRS-LADEC, ENS de Lyon*

Rosa Andreína vive en Guatire, un suburbio de Caracas, tiene 30 años y 4 hijos. Trabaja en una tintorería industrial y en junio de 2017 ganaba 13.000 BSF diarios. En aquel momento, ese era el precio de un kilo de arroz. Los obreros de la tintorería habían pedido que se les pagara a diario y en efectivo. De esa manera, Rosa Andreína podía salir del trabajo a las 4 de la tarde e ir directamente a comprar un kilo de arroz y preparar la mitad para la cena y lo que quedara para el desayuno de la mañana muy temprano. El kilo de arroz, importado de China, lo compraba en una tienda de inmigrantes chinos de las que ahora abundan en Venezuela, particularmente en el interior y que han ido substituyendo a los comerciantes locales en los últimos diez años. Los integrantes de la familia de Rosa Andreína estaban haciendo, en el momento de mi trabajo de campo, dos comidas diarias. Cuando le pregunté si podía a veces agregar algo de carne, pollo, huevos, pescado o granos, me hizo un gesto entre negación y resignación con la cabeza. Me dijo que para eso contaba con lo que a veces le podía traer el padre de sus hijos. La pareja se había separado, pero Rosa Andreína afirmaba que “él está[ba] muy pendiente de nosotros”. La búsqueda de alimentos proteicos era una preocupación para ella y por eso faltaba al trabajo para hacer las largas colas para comprar los productos a “precio regulado” que aparecían en los mercados cuando los niños demandaban algo de pollo o huevos. Luego evocamos el “carnet de la patria”, una tarjeta de racionamiento creada por el gobierno de Nicolás Maduro para que las personas puedan, entre otras cosas, tener acceso a la venta de cajas o bolsas de comida de los llamados CLAP. El acrónimo CLAP significa “Comités Locales de Alimentación y Producción”. Sin embargo, ninguno de los productos distribuidos por estos entes estatales es producido localmente. Todos o, en todo caso, la gran mayoría son importados.

La composición de la caja o bolsa CLAP es la síntesis misma, el resultado final, último, de la política de producción y distribución de alimentos y productos de la “revolución bolivariana”, fundada en la importación de alimentos y productos de muy baja calidad con sobreprecio por parte de las empresas financiadas con las divisas que otorga el Estado. Rosa Andreína decía que no valía la pena, por el momento,

“hacer la diligencia” para tener el carné: inscribirse en el Consejo Comunal, que es la instancia local creada por el gobierno y controlada por el partido oficial único, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y luego esperar ser llamado cuando llegaran las “cajas”. Decía también que eventualmente lo tendría que tener porque cada vez cualquier alimento se haría más difícil de obtener. Todos los informantes de ese barrio en Guatire afirmaron en ese momento y sin reparos que la escasez se volvería cada vez peor. Todos subrayaron que la distribución de las bolsas o cajas o, mejor dicho, la venta de las mismas por parte del Consejo Comunal estaba condicionada a la obtención de dicho carné y de la manifestación explícita de pertenecer al PSUV. La mayor motivación para muchos de los informantes para obtener el carné de la patria y poder comparar las cajas CLAP era conseguir la tan apreciada harina de maíz precocida para hacer la masa de las arepas, alimento fundamental de la dieta venezolana. Sin embargo, las arepas preparadas con la harina de maíz que se distribuye en las bolsas CLAP son muy mediocres porque dicha harina no es la apropiada. El producto viene de México y es para preparar tortillas, no arepas. En efecto, en América Latina hay una amplia gama de harinas de maíz precocidas, en su gran mayoría agroindustriales, adaptadas a las recetas, preparaciones y gustos locales. La compra de esa harina a México por parte de las empresas importadoras manejadas por el gobierno venezolano fue ampliamente denunciada por la prensa mexicana, ya que se efectuó con un enorme sobreprecio. En efecto, las cajas CLAP adquiridas en 2017 fueron pagadas a US\$42 cuando en realidad costaban US\$13. Tanto Reuters como la prensa mexicana comentaron ampliamente este caso de corrupción de grandes proporciones que involucra a empresas importadoras de los dos países<sup>1</sup>. Es decir, la harina de maíz precocida a la que pueden acceder los sectores populares venezolanos vía el Estado no solo no es para elaborar arepas, sino que además es de pésima calidad incluso para tortillas, y fue comprada a sobreprecio a través de mecanismos de corrupción administrativa. Pudiera decirse que cada una de las arepas incomibles e indigestas condensan la representación de todo un sistema de peculado doloso minuciosamente concebido para enriquecer a los intermediarios elegidos por el gobierno que se benefician de los mecanismos de control de cambio de la moneda para la importación. Este tipo de casos salen a la luz pública de manera recurrente durante la última década. En efecto, en 2009 y 2010, los medios de comunicación venezolanos reportaron el caso de “Pudreval” (nombre resultado de un juego de palabras que combina podredumbre y “val”, haciendo alusión a PDVAL, el programa de distribución de alimentos manejado por la compañía de petróleos PDVSA). En diferentes áreas del territorio nacional circundantes a los puertos aparecieron miles de toneladas de alimentos descompuestos. Dichos alimentos fueron importados con fines

<sup>1</sup> La prensa mexicana habla del escándalo de la reventa de los “kits de alimentos mexicanos vendidos a sobreprecio al gobierno de Maduro”. Ver: “Parlamento de Venezuela denuncia corrupción” de Reuter, y a Claudia Solera en *Excelsior*.

de distribución por medio del programa de subsidio alimentario del Gobierno, y fueron encontrados en almacenes estatales por todo el país. “Pudreval” fue un escándalo que sensibilizó a la opinión pública con respecto a la cuestión de la corrupción que impera en el sistema de importación de alimentos y materias primas, poniendo al descubierto toda una serie de mecanismos ilícitos que han originado la degradación extrema del mercado de víveres, medicamentos y suministros de todo tipo en Venezuela.

En el marco del contexto de escasez severa, de penurias y de privaciones extremas como el que han padecido los venezolanos durante el último lustro, formularé tres preguntas que guían estas reflexiones: ¿qué significa consumir y vivir en escasez en la Venezuela liderada por el chavismo? Y más profundamente, ¿qué es lo que se está representando, teatralizando políticamente en la escena venezolana en la que un debate supuestamente ideológico borra un aparato, un sistema económico administrativo de transacciones oscuras que ha arruinado a la población?, y, por último, ¿qué nos puede decir el derrumbe de la revolución bolivariana, en su expresión más microsocia, de la relación gobernantes-gobernados en el marco de la crisis global de la democracia?

Estas preguntas se inscriben en un programa de investigación de antropología política acerca del Estado venezolano y la configuración de la relación que ha prevalecido entre gobernantes y gobernados en el periodo de la revolución bolivariana, en particular a lo que se refiere a las políticas de la vida, en el sentido del cuerpo físico y de la implicación política de los individuos a partir de su cuerpo biológico. Dichas interrogaciones se fundamentan en una serie de correlaciones empíricas observadas en trabajos de campo que han tenido lugar entre 2011 y 2015 en la ciudad de Punto Fijo (estado Falcón) y en Guatire (estado Miranda). Por una parte, intentaré dar elementos para mostrar de qué manera en el régimen bolivariano, “el pueblo” fue constituido en el imaginario político y construido como sujeto a partir del consumo de aquellos productos que permiten la vida misma –los alimentos, los medicamentos– y no de la ciudadanía. Sostengo entonces que la promesa política chavista no fue la de otorgar el acceso a derechos ciudadanos, así como tampoco vencer o cambiar las relaciones de producción que generan explotación en el trabajo. La promesa de la revolución bolivariana del presidente Chávez cristalizó el deseo de tener acceso a subsidios otorgados por el Estado a través del partido de gobierno para adquirir productos, en particular productos alimenticios. Por lo tanto, el mayor logro de la revolución fue lograr el control de las redes de comercialización y de distribución de comida y de otras mercancías que garantizan la supervivencia, la salud y la higiene corporal. Esto hace que se configure una relación muy particular entre el cuerpo físico del ciudadano –las necesidades biológicas, el sufrimiento, la enfermedad y la apariencia física– y la noción de justicia. Sostengo pues que el “hombre nuevo” de la revolución bolivariana venezolana no es concebido como un sujeto de derechos, sino que es un sujeto que se encarna, valga la redundancia, en un cuerpo físico, en una biología con acceso, o no, al consumo que le permite mantenerse.

Por otra parte, la problematización del consumo en relación con la sobrevivencia se inscribe en una dimensión más amplia que concierne a la concepción misma de la Modernidad venezolana y su crisis actual. Es a partir de mi interés por los objetos más anodinos de la vida cotidiana que intento dar cuenta de las situaciones extremas –la escasez, la violencia, los desastres– para mostrar en qué consisten los operadores concretos que actúan sobre la vida de las personas en situaciones de sujeción, de dependencia, de reducción de su margen de acción.

Parto entonces de la pregunta acerca de la manera en que se está dando la producción de subjetividades en una sociedad como la venezolana, un espacio social fracturado e, incluso, una República fragmentada (Straka), es decir, baldía e ilusoria. Una sociedad que se está consumiendo a sí misma al aniquilar el pacto social que la funda; una sociedad que se está autodevorando en un proceso político extremadamente violento, marcado, además, por la incertidumbre, el sentimiento de fracaso y de desesperanza. Una sociedad atravesada por el sentimiento común de no haber podido lograr tener éxito en un proyecto colectivo común, un proyecto de integración social moderno. Sostengo pues que la sociedad venezolana está asentada sobre las ruinas de un proyecto de Modernidad abortado (Benjamin; Stoler) y que la experiencia subjetiva de este aborto nos habla de consecuencias y experiencias monstruosas y abominables. La vivencia cotidiana de los sujetos es una experiencia extrema a causa de la degradación severa de la infraestructura física y las instituciones que se habían consolidado medianamente entre 1958 y 1998, durante el período de la democracia representativa. Los venezolanos viven una suerte de tensión irresoluble en la que la esfera cultural está marcada por los valores del consumismo, por el deseo de acceder a bienes y mercancías, mientras que lo cotidiano está signado por la escasez severa y diversas formas agudas y concretas de mengua y de abandono social total.

La revolución bolivariana es, desde este punto de vista, conservadora y centralizadora, ya que consolidó aquello justamente que se debería haber cambiado, asegurando una inmensa centralización del poder de un Estado rentista petrolero que funciona a partir del manejo discrecional de las divisas que se redistribuyen a los diversos sectores productivos o, más bien, importadores. Con la crisis del modelo de la revolución bolivariana, el proyecto político-económico bolivariano se fue centrando, restringiendo y limitando a diversas formas de subsidio directo de divisas para los empresarios que pudieron pactar con las instituciones y corporaciones estatales. En lo que concierne a las clases sociales bajas, el poder se ejerce distribuyendo y prometiendo el acceso al consumo de ciertos bienes investidos de un peso muy particular en el imaginario moderno venezolano (Douglas) –la harina de maíz precocida, por ejemplo– que hoy desaparecen ineluctablemente.

Para aquellos que no cuentan con la posibilidad de obtener divisas y cambiarlas en el mercado negro; comprar, adquirir y encontrar productos de primera necesidad implica enfrentar una serie de dificultades a causa de penurias y restricciones que se

viven de manera extrema. Los estantes vacíos de los establecimientos comerciales, la hiperinflación y la escasez de dinero en efectivo, hacen que la más pequeña compra sea una prueba de resistencia con impedimentos muchas veces insalvables. Esta situación genera frustración, rabia, desespero, angustia que, en el caso de la privación de los productos farmacéuticos, se traducen en la muerte inminente. Esta vivencia cotidiana genera en los sujetos una serie de emociones y pasiones extremas. Además, dicha situación ocasiona fenómenos sociales y prácticas muy específicas violentas e ilícitas –como la corrupción o la reventa ilegal de productos con sobreprecio y la especulación– que van evolucionando según los cambios de las reglas establecidas por las instituciones partidistas que todo lo controlan. De esta dinámica resulta, al final, una serie de juegos, de azares de vida o muerte para los venezolanos.

En mis trabajos de campo de 2015 y de 2017, así como en el estudio minucioso que he venido haciendo sobre el caso del agricultor huelguista de hambre Franklin Brito, fallecido en 2010 y sobre el cual volveré más adelante en este ensayo, hay una serie de preguntas desde el punto de vista de los sujetos que aparecen explícita o veladamente queriendo darle sentido a la escasez: ¿por qué no hay nada y por qué lo que hay no se puede comprar? ¿Dónde está el ingreso petrolero que entró? ¿Quién lo gastó? En este juego de escasez y, paradójicamente, de excesos –violencia, despilfarro de la nueva clase que se beneficia de las divisas obtenidas vía la corrupción y represión política desmesurada– sostengo, pues, que consumir o intentar hacerlo para sobrevivir se convierte, a partir de un proceso extremo y destructivo, en una especie de autoconsumo del propio cuerpo y de la vida, en una suerte sacrificio sin sentido, en donde el esfuerzo de supervivencia y reclamo se traduce en acciones excesivas que resultan, sin embargo, nunca ser suficientes.

#### CONSUMO Y MIMETISMO SOCIAL

En 2014 se terminaron de desvanecer los logros de las políticas sociales del chavismo. Los efectos del *boom* petrolero entre 2004 y 2008 generaron recursos financieros descomunales. Entre 1999 y 2011, las exportaciones de petróleo posibilitaron que ingresaran 608 mil millones de dólares. Solo en 2012 ingresaron 92 mil millones de dólares al fisco venezolano. Ningún otro presidente de la historia tuvo un periodo de tal prosperidad económica. El *leitmotiv* del chavismo de acabar con la pobreza se resumió a políticas de redistribución del ingreso en las que se asimilaba el fin de la pobreza con consumo. Lo que era supuestamente una alternativa al capitalismo, resultó ser una máquina clientelista de redistribución de recursos escasos, es decir, hoy en día, las bolsas CLAP a las que solo se tiene acceso a través del carné de la patria.

Siguiendo las líneas teóricas de la antropóloga Ann Stoler y sus trabajos sobre las sociedades poscoloniales, la significación de la ruina de un proyecto de modernidad

abortado como el venezolano –revelada en las infraestructuras degradadas y deterioradas, el menoscabo de las construcciones civiles, las averías recurrentes en todas las redes de comunicación y de electricidad y un largo etcétera– constituyen la condensación de aquellas ilusiones de lo que pudo haber sido y no fue, de las maneras en que adquieren sentido las decepciones, es decir, el fracaso de un proyecto que es vivido como un desengaño. Ese es el sentido que adquieren las ruinas de la Venezuela poschavista.

Desde el 2013, el control total de las importaciones y de las divisas necesarias para hacerlas, ha generado un sistema burocrático, alimentado por las divisas de la renta petrolera, que, sin lugar a dudas, ha sido el más corrupto de la historia del país. En 15 años, 35 tasas de cambio diferentes hicieron que se crearan mecanismos dolosos para generar dinero jugando con las tasas, dejando márgenes enormes a un sector social que hoy se denomina la “boliburguesía” (Lander).

Los trueques e intercambios comerciales con los países del ALBA fueron extremadamente nocivos para la economía nacional. En los mercados populares desaparecieron progresivamente los productos hechos en Venezuela. Antes de la “revolución bolivariana” liderada por Hugo Chávez, la economía venezolana había logrado una cierta autosuficiencia en la producción de lácteos, carne y pollo, por ejemplo. Veinte años después del inicio de la revolución, y solo por dar algunos ejemplos, los frijoles negros vienen de Nicaragua, la leche en polvo de Uruguay y de México, los pollos congelados de Brasil. Todos estos productos son, además, comprados a sobreprecio por el estado venezolano, que se convirtió en una gran empresa importadora monopolizando completamente el mercado alimentario. Dichos productos son, además, de muy baja calidad y su trazabilidad resulta imposible para los consumidores venezolanos.

En este contexto violento y brutal, los consumidores venezolanos tienen que estar permanentemente tomando decisiones que implican la vida o la muerte. Las largas colas para adquirir productos, la gente hurgando en la basura, los grupos virtuales formados en las redes sociales por parientes y amigos que solicitan desesperadamente medicamentos para sus seres queridos o enfermos conocidos, han hecho que cambien los usos mismos de los bienes y de las mercancías, así como también las maneras de comprar, de concebir el mercado y de vivir el consumo. Más que consumidores, los venezolanos se han convertido en colectores o recolectores. Ya no se trata de comprar en el mercado las mercancías y los bienes, sino de localizarlos con un enorme esfuerzo, proponer intercambios, hacer enormes filas de espera, etc. Pienso que la reutilización de los productos, el cambio de uso de las mercancías –lo que sirve para algo puede quizás también servir para otra cosa–, hace que los venezolanos que están viviendo el colapso del chavismo y de su modelo económico se hayan convertido en una suerte de “colectores” en un sentido más radical al que le dio Walter Benjamin a esta expresión, para marcar el significado de una modernidad fallida. La experiencia

de los colectores venezolanos está marcada por una serie de emociones extremas como la desesperación y la impotencia. Eso es lo que concierne al consumidor. Pero también aparecen revendedores, redistribuidores y todos aquellos que intentan sacar provecho a partir de una serie de prácticas de comercialización especulativa que el propio sistema económico favorece e incluso estimula.

Esta escasez genera prácticas, maneras de hacer y modifica las maneras de vivir, en sus formas ínfimas y cotidianas. El “bachaqueo” –denominación que le han dado los venezolanos a la reventa ilegal detallada de productos– genera márgenes de ganancias porque el revendedor adquirió los productos a precio regulado –es decir, muy bajo– y lo revende mucho más caro. A lo largo de los últimos cinco o seis años, el “bachaqueo” se ha ido además transfigurando ya que los revendedores han visto reducida su capacidad de adquirir los productos para la venta, dada la escasez y la inflación. Según lo que pude observar en el terreno en julio de 2017, las cantidades de venta informales, de “bachaqueo” de productos han disminuido. La variedad de productos ofrecidos también se ha reducido mucho y se ha reconfigurado una reventa por dosis o porciones, a las que se les llama “téticas” –pequeñas porciones de alimentos empaquetados en bolsas plásticas transparentes, como leche en polvo, café o aceite–, que ha cambiado el sentido de lo que es comer, la significación misma de la comida y las prácticas alimenticias.

Uno de los fenómenos que marcan este tipo de consumo es la pérdida del valor monetario. En los grupos de amigos o de vecinos, el intercambio no se realiza en función del valor monetario de los productos, sino en función de la dificultad de adquirirlos. Es decir, los consumidores entrevistados razonan de la siguiente manera:

si compro dos productos que valen 2000 bolívares (en 2015), es decir, cada uno 1000, me conviene intercambiar uno con una vecina que me ofrezca otro que a ella le costó 20 bolívares, porque ese producto de 20 bolívares fue adquirido por la vecina después de hacer 8 horas de cola ya que se trata de un producto ‘a precio regulado’; por lo tanto, ese es un producto muy costoso para mí, así cueste 20 bolívares. Ese día mi vecina no fue al trabajo para ir a comprar productos regulados. Por eso no tengo ningún problema en intercambiar un producto que a ella le costó 20, por uno que a mí me costó 1200.

Luego mi entrevistada afirmó, sin ambigüedades que “para mi vecina está muy claro que ella pasa por una gran humillación al hacer esto. Hay una gran consciencia de la humillación, esto es una humillación”.

Durante una entrevista en octubre de 2017, Haydée, de Punto Fijo, estado Falcón, describía la situación que padecía su familia en un pueblo en la costa de la península de Paraguaná. Estas aldeas sufren cortes de electricidad, falta de agua potable, escasez de efectivo y no solo están sufriendo de hambre sino también de sed:

Ellos en el pueblo (Pueblo Nuevo, estado Falcón) la están pasando mucho peor que acá (Punto Fijo), yo los auxilio con un poco del agua que conseguimos aquí, pero han pasado todo un día sin tomar agua porque no tienen ni una gota y eso me desespera, por no tener cómo ayudarlos mucho más. Aquí en casa también estamos pasando dificultad para conseguir agua, a veces compran una bolsa de hielo para derretir una parte en el microondas y así luego ligarla con hielo y tener algo que tomar, pero ya ni eso se está consiguiendo porque ni agua ni electricidad hay.

El hielo, un producto procesado hecho a base de agua potable y gracias a la energía eléctrica, se desvirtúa completamente porque se adquiere para ser derretido, no para enfriar. Consumir agua potable se vuelve un lujo a través de un circuito perverso que dice mucho acerca de las inmensas distorsiones en los patrones de consumo generados por la inmensa crisis que atraviesa el país. La infraestructura de distribución de agua potable no funciona en una gran parte del territorio nacional por falta de mantenimiento, ya que en las sucesivas administraciones del presidente Chávez la inversión en las redes de los servicios públicos no fue una prioridad. Venezuela vive una profunda escasez y crisis en el sistema de distribución de agua potable (Romero Mendoza), pero paradójicamente se puede conseguir hielo, es decir, un producto hecho a base de agua potable y energía. Haydée tiene dinero para pagarlo por las circunstancias de su trabajo, por eso calma la sed derretiendo hielo. El desfase y el desajuste detrás de esta práctica no puede sino explicarse a través de las inmensas contradicciones e incongruencias del modelo económico implementado por las administraciones revolucionarias.

#### LA IMPOSTURA DE LA “SOBERANÍA ALIMENTARIA”

Supuestamente, la concepción subyacente de las políticas alimentarias puestas en marcha por el presidente Chávez era que Venezuela lograra “seguridad y soberanía alimentarias” (Parker). Durante los primeros diez años de la revolución, el discurso oficial propiciaba el autoabastecimiento, penalizaba al latifundio y prometía hacer más accesibles los productos nacionales—incluso acuñando el término “alimentos soberanos” que mencionaré más adelante—, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Sin embargo, los hechos se distanciaron mucho de esas promesas y discursos ideológicos. Progresivamente, la escasez de alimentos fue tornándose crónica y junto con la aparición de mercados negros y prácticas de reventa, las dificultades y la imposibilidad para conseguir productos, no solo alimenticios sino también farmacéuticos, se ha vuelto el epicentro de la actualidad mediática y de la vida cotidiana de los venezolanos, generando desnutrición y en muchos casos muerte en magnitudes todavía no establecidas (Raffalli). La escasez se normalizó y su cotidianidad está generando cambios en los

hábitos alimenticios de los venezolanos, con impactos negativos en la salud pública y nutricional de la población que aún están por establecerse.

Desde el inicio de la “revolución”, el presidente Chávez concentró esfuerzos en lograr el control de la distribución de los productos, en particular de los alimentos de precio subsidiado. En efecto, cuando se pusieron en marcha las Misiones –una serie de programas sociales muy vastos y heterogéneos, en materia de salud, educación, empleo y vivienda (Penfold-Becerra)– se creó una red de supermercados llamada Mercal para vender alimentos y productos a precios controlados. Entre 2003 y 2005, dicha red de establecimientos creció vertiginosamente, alcanzando alrededor de 14 000 puntos de comercialización en todo el país (D’Elia). Esto tuvo lugar, paralelamente, a la implementación de una política muy severa de control de precios. Sin embargo, el gobierno dejó que siguiera funcionando un mercado de productos a precios no regulados, aunque bajo fuertes presiones, ejercidas sobre todo a partir del control de divisas para la importación. La diferencia de los precios entre los dos mercados fue creciendo de manera exponencial y, en un mismo supermercado o expendio, se podían adquirir los dos tipos de productos, unos haciendo largas filas, otros pagando en otra caja o en otro lugar. Esta diferencia explica en gran parte las enormes filas de gente para adquirir los productos regulados, más baratos pero cada vez más escasos. Esas gigantescas colas se han convertido en la imagen mediática emblemática de la crisis venezolana en el exterior (Vásquez Lezama, «La Crise»). Son, de alguna manera, el retrato de la era posChávez, junto con las imágenes de la violencia represiva contra las manifestaciones de 2014 y de 2017 y las del hambre.<sup>2</sup> Las colas para adquirir productos no son sino la punta del iceberg. La velocidad con la que han surgido toda una serie de prácticas informales, ilícitas y especulativas que se derivan de estas políticas, la aparición del mercado negro que he descrito más arriba, el llamado *bachaqueo*, las reventas y los trueques que marcan la crisis de la escasez, constituyen una serie de fenómenos que apenas pueden ser enunciados por los científicos sociales y que marcan una agenda muy vasta para los estudiosos de la historia contemporánea venezolana.

El éxito de los Mercal entre el 2000 y el 2007 estuvo garantizado por la venta de productos a precios entre 30% y 40% más bajos que los supermercados privados. Sin embargo, el tipo de productos que se distribuían a bajo precio nunca garantizaron el acceso a una dieta balanceada en lo que concierne a proteínas, ni de origen animal ni vegetal, así como tampoco a frutas y legumbres. Aceite, harina de maíz y arroz y, en raras ocasiones pollo, eran los productos con mayor demanda. La infraestructura de los establecimientos también contribuyó a la poca capacidad que tuvo esta red para abastecer de comida a la población. Concebidos como galpones, locales provisionales,

<sup>2</sup> El diario *The New York Times* ha consagrado a estos temas numerosos reportajes y artículos de opinión. Los de 2017 han sido particularmente minuciosos en lo que concierne a la crisis humanitaria: <<https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/17/world/americas/venezuela-children-starving.html>>.

sin capacidad de almacenamiento ni de refrigeración, los Mercales de por sí generaban colas. Cuando llegaban los productos se corría el rumor entre los consumidores y solo los que llegaban a tiempo podían abastecerse. Ha surgido además una serie de dinámicas muy violentas en las filas: la gente puede llegar de madrugada o en horas de la noche, las personas venden los números o los puestos y comercian con la necesidad de los que necesitan comprar o con los revendedores. Esta situación se ha dado desde 2014 en todos los puestos de abastecimiento y mercados de todo el país. En el fondo, Mercal, la red de abastos Bicentenario y los otros establecimientos manejados por el gobierno son dispositivos muy mal pensados que reproducen la pobreza, así como la penuria misma. Las personas tienen que pedir permiso en sus trabajos para poder hacer las filas de espera, ya que la compra se organiza a partir del número de la cédula de la identidad. Como si los consumidores no trabajaran, como si comprar alimentos fuera una actividad excepcional, un trámite que hacer ante el gobierno. Además, todo esto obedece a dinámicas propias de la corrupción y la improvisación de la red de abastecimiento. Los locales de Mercal aparecen y desaparecen, según los vaivenes caprichosos de las políticas importadoras y distribuidoras del gobierno.

En 2004 y en menos de un año, más de 40% de los alimentos consumidos en Venezuela fueron distribuidos por redes manejadas por el gobierno (Penfold-Becerra). Tanto las empresas productoras de alimentos como las cooperativas pasaban por dichas redes para distribuir sus productos, muchos de ellos empaquetados con etiquetas con consignas políticas que celebraban la revolución. Mercal fue también un instrumento político para plegar a los productores privados a los intereses de la actividad estatal. Mecanismos de licitaciones opacos, corrupción en la atribución de divisas, la economía de la corrupción portuaria ha hecho estragos en la producción de alimentos de Venezuela y en la seguridad alimentaria (Howard-Hassmann). Desde 2007, la escasez de productos se convirtió en algo recurrente en la red de Mercal. Las enormes sumas de dinero que fueron otorgadas a la importación de alimentos en 2006 a compañías de distribución y venta de productos agrícolas, fueron desviadas en diferentes formas de corrupción.<sup>3</sup> La mayoría de esas empresas quebraron. Así, la regulación de precios y la red de distribución controlada por el Estado no ampliaron el acceso a los productos alimenticios a precio regulado, sino que lo redujeron. La escasez pasó de ser puntual –desaparecían unos y aparecían otros– a ser recurrente y generalizada.

La versión oficial para explicar la escasez que se intensifica en la presidencia de Nicolás Maduro es que el “sector privado representa 70% de la producción”<sup>4</sup> y que hay

<sup>3</sup> La creación de un programa excepcional de distribución de alimentos salió en Gaceta Oficial en 2006 <<http://virtual.urbe.edu/gacetas/38437.pdf>>.

<sup>4</sup> Fuente: Serrano, Alfredo. “Las pruebas del crimen económico contra Venezuela”. 29 dic. 2017. *Telesur*. <<https://www.telesurtv.net/bloggers/Las-pruebas-del-crimen-economico-contra-Venezuela-20171229-0002.html>>.

un boicot explícito contra las transacciones comerciales venezolanas. No se menciona ni una palabra, ni una línea de análisis en esta versión de lo que ocurre en Venezuela con los inmensos mecanismos de corrupción generados por la manipulación de los mecanismos de los controles de cambio de la moneda, por ejemplo.

No es mi intención decir aquí que la “seguridad alimentaria” antes de la llegada de Hugo Chávez al poder era la mejor. El sector agroalimentario venezolano, como país urbano y petrolero, tiene características muy particulares, diferentes al resto de los países de América latina. En los modos de consumo alimenticio y en el patrón que se estableció con la violenta migración rural-urbana que marcó a la sociedad venezolana en el siglo XX, predominan productos transformados provenientes de la agroindustria de poco aporte vitamínico y proteico. Los sectores populares de las áreas urbanas comían mal antes de Chávez y ahora comen peor. O no comen. La agroindustria, los problemas de distribución de los productos, la fractura entre las zonas rurales y urbanas facilitaron el acceso a la harina de maíz para hacer arepas, pastas, enlatados, azúcar y refrescos azucarados en detrimento de vegetales, frutas, granos y proteínas. Es una constatación ampliamente compartida por los expertos, así como la de la dependencia de la agroindustria venezolana de los productos importados, que la hace aún más vulnerable. Las políticas agrícolas de los años 90 se basaron fundamentalmente en la implementación de grandes subsidios a la agroindustria, reforzando el modelo alimenticio y los patrones de consumo muy dependientes de productos importados y altamente procesados.

Las políticas en materia de importación no solamente han afectado profundamente el acceso a los alimentos sino también a la posibilidad de procurarse medicamentos. Tanto en el caso de las enfermedades infecciosas como en el de las crónicas, los venezolanos se encuentran sujetos a una serie de situaciones extremas marcadas por la extrema precariedad al acceso a la salud. Ya no se trata pues de interrogarse sobre los problemas inherentes a las políticas públicas de un Estado de bienestar en crisis sino de intentar entender en qué consiste la gestión de la supervivencia que pone en práctica el gobierno venezolano. La ministra de salud, Antonieta Caporale, fue destituida en mayo de 2017 por haber difundido un informe en el que se muestra el incremento importante de la mortalidad infantil y la materna. En efecto, en Venezuela los investigadores no tenemos acceso al boletín epidemiológico, que estuvo disponible hasta el 2014. Las cifras de mortalidad infantil y materna, así como de las enfermedades de declaración obligatoria, son secreto de Estado. Solo existen los partes oficiales, no desglosados y no verificables por los epidemiólogos. Incluso, a los médicos les está prohibido declarar ciertas enfermedades diagnosticadas. Tal es el caso de los virus del Denge, el Zika y la Chikungunya. Es decir, el gobierno venezolano no solo esconde los datos, sino que niega la realidad de las epidemias. Sin embargo, en la medida de lo posible, hay organismos que hacen su trabajo de manera independiente. El Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de

Venezuela muestra, por ejemplo, que, en 1999, cuando se inició la “revolución”, hubo 22,000 casos de paludismo al año. En 2016, subió a 350,000. Otro ejemplo: la difteria reapareció después de 25 años sin casos. Así lo reveló una red de médicos que trabaja en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Esto quiere decir que el Estado venezolano no está cumpliendo con el esquema de vacunación en niños de la llamada “pentavalente” (difteria, tétano, pertussis, hepatitis B y *Haemophilus Influenzae* Tipo B). Este tipo de brotes epidémicos dice mucho del profundo disfuncionamiento de las instituciones venezolanas. Con respecto a las enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes, hemofilia, problemas renales, epilepsia, entre otras; la situación es dramática, ya que los enfermos están muchas veces condenados por la ausencia de medicamentos en el mercado. Ni hablar de los tratamientos antirretrovirales para los enfermos de VIH, quienes están expuestos a fallecer por falta de estos tratamientos.

La humanidad es sentida y percibida como precaria, la incertidumbre sobre si será posible sobrevivir o no a una enfermedad hace que haya una reconfiguración total de lo que significa habitar el espacio público. Ya no se trata de participar sino de mostrar, en la medida posible, que se tiene una pasión por la supervivencia. No es en efecto una situación única ni propia de Venezuela: las sociedades sumidas en crisis humanitarias severas y en guerras en el mundo contemporáneo están sujetas a estas “políticas de la supervivencia” (Abélès). Así, la supervivencia, en su sentido más físico, constituye a mi juicio la puerta de entrada –la pasión de sobrevivir– para entender el momento histórico venezolano, en el marco particular de la globalización y de la manera en que la sociedad venezolana se ha insertado en la misma a través de la “revolución bolivariana”. Dependientes completamente de las divisas y de los importadores que negocian con el Estado, los venezolanos viven y se conciben como supervivientes de diferentes maneras y a su manera. Atravesada por las paradojas y por redes de solidaridad, la mayor amenaza a la supervivencia es la fragmentación social y el abandono. ¿Hasta cuándo la familia puede compensar el acoso y amedrentamiento frente a redes destructivas de poder? ¿Cuáles son los márgenes de maniobra que un individuo puede desplegar en una situación de sujeción? ¿Hasta dónde se puede intentar desafiar a los juegos de poder que marcan lo cotidiano? Estos interrogantes guían el análisis de la siguiente parte.

#### CONSUMIR SU PROPIO CUERPO

Un agricultor murió el 30 de agosto de 2010 en el Hospital militar de Caracas. Estaba confinado en un depósito sin derecho a visita. Brito había hecho varias huelgas de hambre desde 2005 y se mutiló, se seccionó frente a las cámaras de televisión, la falange del dedo meñique de la mano izquierda. Brito ejecutó esta modalidad de protesta para oponerse a la invasión de sus tierras. Primeramente, tuvo un conflicto con el alcalde del municipio a causa de sus cultivos de ñame. Brito le había demostrado

a la corporación que financia la venta de pesticidas, la CVG, que sus productos no eran necesarios para producir ñame. Por esa razón, la CVG le cortó el financiamiento al alcalde del partido oficialista PSUV, poniendo al descubierto una fuente de corrupción a través de la venta de pesticidas. A modo de retaliación, el alcalde llevó a cabo varias acciones violentas que obligaron a Brito a dejar sus tierras. Ordenó, por ejemplo, invadir el fundo del agricultor porque al demostrar que los pesticidas no eran necesarios, el alcalde ya no podía seguir comprando los pesticidas a sobreprecio.

En el video que Brito grabó el 5 de octubre de 2009 y que difundió por Youtube, al entrar en el día 93 de una de sus huelgas de hambre, explicó con detalles el inicio del conflicto por el que perdió sus tierras. Su propiedad agrícola se extendía sobre 290 hectáreas. Esta propiedad era para Brito el logro de un proyecto de vida que había forjado desde su juventud. De Rio Caribe, en el estado Sucre, se fue a Caracas, a realizar sus estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela. En la capital, vivía en casa de su hermana María en la zona de Caricuao, mientras cursaba estudios de biología en la Facultad de Ciencias. La decisión de irse a desarrollar un proyecto agrícola junto con su familia fue original y ambiciosa. Elena es caraqueña y acompañó a su marido en esa especie de aventura, llena de esperanza. Brito estaba desafiando, sin saberlo, el modelo hegemónico de la producción agrícola en Venezuela, paradójicamente denunciado por la revolución, sin que ninguna verdadera alternativa haya sido puesta en marcha. La vivienda familiar de los Brito estaba situada dentro de la propiedad. Su esposa Elena daba clases en la escuela primaria del pueblo y Brito en secundaria. Cuando Elena, la esposa, y Ángela, su hija mayor, me contaron esta historia del regreso de la familia a la agricultura, me llamó mucho la atención la decisión de irse al estado Bolívar y no al estado de origen. Por la manera en que me relataron la decisión, percibí que fue en ese estado del sur del país donde tuvieron la oportunidad de obtener tierras, beneficiándose de las medidas de distribución implementadas al inicio del primer gobierno de Chávez. Sin embargo, la presión de la ganadería en esa región es mayor y quizás en el estado Sucre hubieran corrido con mayor suerte. Brito tenía un proyecto agroforestal muy preciso y estudiado, además de extremadamente pertinente en términos ecológicos, para la preservación de los bosques tropicales. Resulta irónico y extremadamente significativo en lo que concierne a la manera de gobernar que impera desde 1999, que, mientras Brito luchaba por producir alimentos de forma sustentable, en 2006 se hayan otorgado enormes sumas de dinero a planes del abastecimiento de la cesta básica “para la elaboración de alimentos y productos agroalimentarios de primera necesidad”. El fracaso de las corporaciones de abastecimiento agrícola creadas en 2006 se refleja de manera brutal en el 2017, con el mayor caos alimentario que haya vivido país latinoamericano alguno.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> La creación de ese plan excepcional de abastecimiento de alimentos en 2006 se hizo oficial al publicarse en la Gaceta de mayo de 2006: <<http://virtual.urbe.edu/gacetas/38437.pdf>>.

Hay que tratar este caso con justicia y con justeza. Por lo que es preciso subrayar que no hubo una adhesión masiva de movimientos identificados con la “sociedad civil” que estuviesen vinculados a la causa ecológica que apoyara a Brito o que declararan a su favor. Brito murió solo. En la opinión pública no hubo vinculación de su caso con los problemas ecológicos ligados al uso de fertilizantes y pesticidas, la pertinencia de los proyectos agroforestales, así como tampoco a los problemas de tenencia de la tierra y a otros casos de arbitrariedad y clientelismo político en la distribución de las “cartas agrarias”. Prevalció en la prensa la percepción de que se trataba un conflicto individual entre un agricultor testarudo y lunático y el presidente Hugo Chávez.

En efecto, Franklin Brito sí incorporó, de manera ontológica, los valores de la modernidad, de la ciudadanía y de la justicia (Vásquez Lezama, “La Tension”). No hubo en Brito impostura y su acción excesiva y obsesiva muestra que en su caso hubo una verdadera y sincera adhesión a valores como el de la justicia. Es por ello que el suyo es un caso aparte, único, que permite acercarse, desde una perspectiva epistemológica, a la totalidad de la crisis y, en particular, a los límites, cada vez más estrechos, del estado de derecho en Venezuela.

Retomo la noción antropológica de mimetismo (Sánchez) sobre la manera en que se construye una identidad hegemónica. Rafael Sánchez muestra cómo desde la Guerra de Independencia, el orden colonial no fue completamente abolido y el republicano no fue asimilado sino mimetizado, aprendido por mimesis (393). Después de la Guerra de Independencia, el orden colonial se hizo añicos y el aprendizaje de la vida en el marco de la República ocurrió de manera mimética. No debe pensarse que esta mimesis ha sido siempre impostura. En efecto, también se trata de significaciones que encuentran sentido en la memoria y en las aspiraciones de las personas, es decir, los mimetismos sociales pueden producir sentido (Taussig). Sin embargo, el orden socialista del chavismo ha sido discursivo, mientras que el consumo ha sido el que ordena la aspiración y la promesa para acceder a esa identidad hegemónica. Así, el consumo –y su expresión obsesiva, el consumismo a ultranza– ordena y condiciona, por una parte, el acceso a una identidad hegemónica, así como también es la máxima expresión del ejercicio del poder del Estado sobre los individuos en los ámbitos cotidianos.

Los venezolanos se encuentran confrontados con un poder excesivo, con una reducción de su propia soberanía individual –la capacidad de alimentarse, curarse, etc.–, paradójicamente en un contexto político en el que el poder del Estado reclama sin cesar al “pueblo soberano”, como lo hacía usualmente el presidente Chávez en sus múltiples alocuciones presidenciales. Esta configuración de sujeción hace que lo político sea una suerte de burbuja que traza los confines mismos de la supervivencia biológica. Así, la cuestión de la incorporación y la biopolítica, en el sentido expresado por Michel Foucault al final del primer tomo de su *Historia de la Sexualidad*, viene al caso de una manera particular. En efecto, en Venezuela tuvo lugar una transformación del cuerpo físico en cuerpo político, lo cual es también palpable, no solo en lo que

concierno al caso del agricultor huelguista Franklin Brito expuesto anteriormente, sino también, a través de mi análisis sobre los damnificados de *La Tragedia de Vargas* (Vásquez Lezama, *Poder*). En ambos casos, uno en plano singular y el otro en lo colectivo, estamos ante la configuración de diversas biopolíticas puestas en prácticas por el régimen creado por el presidente Chávez. Aun cuando se trata de una biopolítica colectiva, en el caso del desplazamiento de población y confinamiento de los damnificados de los deslaves que afectaron a la costa venezolana en 1999 y, de otra individual en el caso de Brito, considero que en la máquina política que obliga a los individuos a estar “sujetos a”, es decir, depender de un orden afectivo y no de uno institucional, se cristaliza la tensión entre la emoción de la compasión y la justicia. En el caso de Brito y de otras manifestaciones recientes de protestas en las que el cuerpo físico del individuo es voz y medio de las protestas, se trata de reducir al individuo a una condición en la que no tiene voz de sujeto político. El individuo “está sujeto a”, no es “sujeto de”, es en efecto una manifestación de la diferencia entre sujeción y subjetivación.

Sin embargo, en el caso de la crisis actual, la sujeción de la ciudadanía a lo biológico se está configurando a partir del control del consumo. La ciudadanía queda restringida, por no decir anulada, por la necesidad biológica de consumir los bienes básicos. El sujeto político de la revolución ya no habla, como pudieron hacerlo de cierta manera los dignificados o el propio Brito, sino que se pronuncia a través del consumo, de su necesidad o de su deseo de consumir. Es a través del consumo o del querer consumir que se produce un cuerpo nacional y político de Venezuela.

Veamos un estudio de caso donde lo extremo y la incertidumbre signan las dimensiones más banales. En la refinería de petróleo de Amuay ubicada en el centro de refinerías de la península de Paraguaná, en la costa noroeste de Venezuela, ocurrió una gigantesca explosión que dejó 48 muertos y 156 heridos en agosto de 2012. El escape de gases de tipo oleofinas, cuando ocurría un llenado entre las refinerías de Cardón y Amuay a la una de la madrugada, generó una onda expansiva. Esta catástrofe marcó profundamente la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón. Parte de mi trabajo de campo tuvo lugar en las zonas de Jubidabana y Alí Primera en el mismo estado, durante el 2015.

Por razones de espacio, no ahondaré aquí sobre la dimensión antropológica del desastre. Sin embargo, me interesa subrayar algunos hechos que indican un cambio en la economía moral de los afectos y las emociones que había predominado en el discurso del presidente Chávez hasta ese entonces. Cuando el presidente visitó el sitio de la explosión, reinaba una gran confusión acerca del origen de la explosión. Hubo un cerco mediático muy significativo y se instaló una atmósfera de control total de la información. Petróleos de Venezuela (PDVSA) enseguida señaló que se trataba de acto de sabotaje y acusó a la “oposición” de causar esta inmensa catástrofe, en particular al grupo “Gente de petróleo”, formado por ex empleados de PDVSA, que habían sido

despedidos en el 2002, pero que siguieron siendo muy activos en el ámbito petrolero. De este modo, se silenció la polémica de una manera muy autoritaria, así como la posibilidad de sacar a la luz pública cualquier investigación medianamente imparcial.

La frase del presidente Chávez “el show debe continuar” pronunciada frente a las cámaras de televisión con los tanques de petróleo ardiendo detrás de él y, mientras los familiares buscaban todavía los restos de los desaparecidos por la onda expansiva de la explosión, condensa la postura oficial. El matiz discursivo que introdujo el presidente Chávez es significativo: en Amuay, oficialmente, no hubo “víctimas”. No son reconocidas como tales. Son víctimas sin rostro, sin nombre. Sus familiares son silenciados por la censura. Los médicos que los atendieron no pueden declarar, ni siquiera para describir las condiciones en que se realizó la atención médica. No hubo pues “víctimas dignificadas” en Amuay. Las indemnizaciones se realizaron a través de negociaciones secretas. Durante las entrevistas que realicé, mis informantes me pidieron que solo hablara de la compensación recibida públicamente, de lo contrario, temían que les quitaran el dinero, la casa o cualquier otro bien compensatorio.

El nombrar, las maneras de nombrar a las víctimas, es un asunto con amplias repercusiones políticas. La “ciudad petróleo” de Punto Fijo, que una vez fue la referencia por ser adyacente al complejo de refinerías que llegó a ser el más grande del mundo, es una urbe que construye su vida cotidiana dentro de una crisis sin precedentes, en la que las refinerías en ruinas son una espada de Damocles. Los habitantes que viven cerca de esta infraestructura dañada, averiada y disfuncional experimentan la amenaza inminente de un accidente de grandes magnitudes. La ruina petrolera es quizás el signo distintivo del momento actual de la crisis venezolana para esta ciudad. La fantasmagoría de la refinería que producía riqueza y que hoy es una ruina, una chatarra, expresa esta crisis civilizatoria de la modernidad venezolana.

Las ruinas de la refinería producen una suerte de terror ya casi banal y cotidiano, en los habitantes de Punto Fijo, quienes temen a toda hora un posible accidente. Esta zozobra e incertidumbre muestra la vanidad y la trascendencia de un proyecto revolucionario fallido que no pudo reformular el proyecto de Modernidad que rigió al país entre 1958 y 1998. La sensación de estar perdidos y de no encontrar un camino que permita trazar un antes y después hace que sean reducidas las posibilidades de redefinir colectivamente la esperanza, sentimiento que implica necesariamente la retoma de al menos un poco de control sobre la propia vida física, a partir de mínimas certidumbres.

## OBRAS CITADAS

- Abélès, Marc. *Politique de La Survie*. París: Flammarion, 2006.
- Benjamin, Walter. *The Arcades Project*. Boston: Harvard UP, 1999.
- D'Elia, Yolanda. *Las misiones sociales en Venezuela: Una aproximación a su comprensión y análisis*. Caracas: ILDIS, 2006.
- Douglas, Mary. *The World of Goods. Towards an Anthropology of Consumption*. Londres: Routledge, 1986.
- Foucault, Michel. *Histoire de la Sexualité: La Volonté de Savoir*. París: Gallimard, 1976.
- Howard-Hassmann, Rhoda E. "The Right to Food Under Hugo Chavez". *Human Rights Quarterly* 37/ 4 (2015): 1024-1045.
- Lander, Edgardo. "El proceso bolivariano y las tensiones de un proyecto alternativo. Conversación Con el politólogo Edgardo Lander". *Rebelión* 2009. <<https://www.tni.org/es/articulo/el-proceso-bolivariano-y-las-tensiones-de-un-proyecto-alternativo>>. 30 jun. 2018.
- Parker, Dick. "Chavez y la búsqueda de una seguridad y soberanía alimentarias". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* 14/3 (2008): 121-143.
- Penfold-Becerra, Michael. "Clientelism and Social Funds: Evidence from Chávez's Misiones". *Latin American Politics & Society* 49/4 (2007): 63-84.
- Raffalli, Susana. "La idea de que esta crisis la vamos a resolver con ayuda humanitaria es un Mito". *Prodavinci* 2017. <<https://prodavinci.com/especiales/el-hambre-y-los-dias/entrevista-raffalli.html>>. 30 jun. 2018.
- Reuters Redacción. "Parlamento de Venezuela denuncia corrupción en compra de alimentos con pérdidas de 200 mln dlr." 15 jun. 2017. *Reuters*. <<https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1962XG-OUSLT>>. 30 jun. 2018.
- Romero Mendoza, Carlos. "La prestación del servicio de agua potable. ¿En crisis?" *PolitikaUCAB* 2015. <<https://politikaucab.net/2015/05/14/la-prestacion-del-servicio-de-agua-potable-en-crisis/>>.
- Sánchez, Rafael. *Dancing Jacobins: A Venezuelan Genealogy of Latin American Populism*. Nueva York: Fordham UP, 2016.
- Serrano, Alfredo. "Las pruebas del crimen económico contra Venezuela". 29 dic. 2017. *Telesur*. <<https://www.telesurtv.net/bloggers/Laas-pruebas-del-crimen-economico-contra-Venezuela-20171229-0002.html>>. 30 jun. 2018.
- Solera, Claudia. "Maduro saca raja a víveres de México; vende despensas 112% más caras a pobres". 1 ago. 2017. *Excelsior*. <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1178934>>. 30 jun. 2018.
- Stoler, Laura Ann. "Imperial Debris : Reflections on Ruins and Ruination". *Cultural Anthropology* 23/2 (2016): 191-219.
- Straka, Tomas. *La República fragmentada. Claves para entender a Venezuela*. Caragas: Editorial Alfa, 2016.

- Taussig, Michael. *Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses*. Londres: Routledge, 1993.
- Vásquez Lezama, Paula. “La Crise Vénézuliénne: Causes et Conséquences de L’effondrement de La Révolution d’Hugo Chavez”. *Diplomatie* (2016): 26-29.
- \_\_\_\_\_. “La Tension entre l’autoritarisme et la compassion”. *Raisons Politiques* 65 (2017): 91-105.
- \_\_\_\_\_. *Podery catástrofe. Venezuela bajo La Tragedia de 1999*. Caracas: Santillana, 2010.

Palabras clave: cuerpo, consumo, incertidumbre, bolivarianismo, Venezuela

Recibido: 23 febrero 2018

Aprobado: 17 mayo 2018